



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

REFERENCIA:	SENTENCIA
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	OMAR DE JESÚS ZAPATA ZAPATA
DEMANDADO:	AFP PROTECCIÓN S.A. Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RADICADO:	0500013105 015 2020 00297 01
ACTA N°:	93

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **OMAR DE JESUS ZAPATA ZAPATA** para pronunciarse en virtud del recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia con la cual el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 93** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### **1. LA DEMANDA<sup>1</sup>**

El demandante pretende con este proceso se declare que se condene a PROTECCIÓN a liquidar y pagar 22 mesadas pensionales desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2019 por un valor total de \$16.562.320 y las mesadas adicionales de diciembre de 2017 y 2018 por un valor total de \$1.656.232, con indexación y costas.

Para ello narró, en síntesis, que **OMAR DE JESUS ZAPATA ZAPATA** se afilió a PROTECCION desde el mes de mayo de 1995, nació el día 15 de septiembre de 1955, cumplió 62 años el 15 de septiembre de 2017 fecha para la que tenía cotizadas las semanas requeridas para la pensión por haber cotizado 1150 semanas, además de tener los dineros suficientes de acuerdo al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Realizó

---

<sup>1</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 – páginas 3 a 6

su desafiliación al sistema al cumplir la edad y tener los fondos suficientes para ser pensionado. Fue pensionado por Protección el día 01 de junio de 2019, entidad que no reconoció las mesadas retroactivas desde que se le generó el derecho, es decir, desde el día siguiente en que cumplió los 62 años de edad, requerimiento único por cumplir.

## 2. CONTESTACIONES

### 2.1. PROTECCIÓN<sup>2</sup>

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y para ello se pronuncia del siguiente modo: En primer lugar, se opuso a que se declare que se causó el derecho desde el **17 de septiembre de 2017**, señalando que el reconocimiento de la prestación de Garantía de Pensión Mínima se dio luego de la solicitud del actor el día **22 de abril de 2019**, porque si bien cumplió la edad en el 2017 no contaba con el capital suficiente para financiar una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, lo que hizo que se acudiera a la solicitud de garantía de pensión mínima ante el Ministerio de hacienda y crédito Público. Precisa que, si bien el actor no siguió efectuando cotizaciones con posterioridad a la radicación de su solicitud, tenía ingresos certificados por valor de \$2.350.000, por lo que conforme a lo dispuesto por el **artículo 84** de la ley 100 el disfrute de la prestación económica denominada Garantía de Pensión mínima resultaba incompatible con el pago del salario. Resalta que en el régimen de ahorro individual con solidaridad no puede hablarse de una fecha de causación y disfrute de la pensión estrictamente fijadas, pues todo depende de la voluntad libre del afiliado y de los recursos existentes en la cuenta de ahorro individual, en los términos del **artículo 64** de la ley 100 de 1993; y **no se pueden comparar las fechas de causación y el disfrute de la pensión en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media**.

Propuso como excepciones las que denominó BUENA FE, HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, PRESCRIPCIÓN, PAGO, COMPENSACIÓN, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR e IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS

### 2.2. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES<sup>3</sup>

La Sala precisa que la demanda se instauró en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A., pero se dispuso la vinculación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES como litisconsorte necesario por pasiva con auto del 26 de enero de 2021<sup>4</sup>, al encontrar que la pretensión del demandante es la de “obtener el retroactivo de la pensión de garantía mínima” y se pueden ver afectados recursos provenientes del presupuesto general de la Nación.

<sup>2</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 05 – página 3 a 17

<sup>3</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 2 a 10

<sup>4</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 07

Esta entidad en la contestación también se opone a las pretensiones de la demanda detallando el trámite adelantado con ocasión de la emisión del bono pensional del actor así como de la trámite de Garantía de Pensión Mínima de Vejez a instancias de PROTECCIÓN, para enfatizar en la improcedencia de lo pretendido por el actor. Propuso como excepciones las que denominó BUENA FE y EXCEPCION GENERICA

### 3. SENTENCIA

En la audiencia del **24 de junio de 2022**<sup>5</sup> la Juez Quince Laboral del Circuito tomó las siguientes decisiones: **i)** DECLARAR que al demandante OMAR DE JESÚS ZAPATA ZAPATA, NO le asiste derecho a que su pensión de vejez le sea reconocida por la AFP PROTECCIÓN S.A. a partir del 16 de septiembre de 2017, y así la prosperidad de la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, propuesta por la AFP PROTECCIÓN S.A. **ii)** ABSOLVIÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A. y a la integrada como litisconsorte necesario por pasiva NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Para tomar estas determinaciones argumentó básicamente lo siguiente: **i)** En primer lugar, al establecer el marco normativo para efectuar el análisis, invocó los artículos 64 y 65 de la ley 100 de 1993, señalando que para la garantía de pensión mínima concurre para su causación no solo el cumplimiento de la edad y semanas mínimas exigidas en la norma sino también la voluntad del afiliado, manifestada en la solicitud de su reconocimiento, señalando que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral la garantía de pensión mínima se causa al momento en que se cumplen las semanas y edad mínima pero se hace exigible al momento de que formule la respectiva reclamación, previa determinación de que el capital de la cuenta de ahorro individual no sea suficiente en una pensión mensual, superior al 110% del smlmv en los términos del **art. 64 de la Ley 100 de 1993**. Resalta que frente a las administradoras de fondos de pensiones radica la obligación de atender la solicitud de garantía de pensión mínima conforme lo establece el **artículo 83 de la Ley 100 de 1993, el artículo 20 y 21 del Decreto 656 del 94 y el 9 del Decreto 832 del 96**, en los que se establece la obligación de gestionar todo lo concerniente con la emisión de los bonos pensionales y el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, así como la garantía del pago provisional mientras se efectúe el reconocimiento por cuenta del Ministerio de Hacienda. **ii)** Ya en el caso concreto, encontró que el demandante cumplió los 62 años de edad el 16 de septiembre de 2017 y la última cotización que hizo fue el 28 de febrero de 2008 acreditando un total de 1.325 semanas. Pero la solicitud de reconocimiento de pensión fue realizada el 06 de febrero de 2019, PROTECCIÓN S.A. realizó los trámites

<sup>5</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 22

pendientes dentro de los 4 meses posteriores con bono pensional reconocido mediante Resolución 1980 del 20 de febrero de 2019, reconociendo la pensión a partir del mes de junio de 2019, por lo que no encuentra razón para reconocer el retroactivo pensional desde la fecha en que cumplió la edad, habiéndose empezado a pagar una vez vencido el plazo de los 4 meses sin que su disfrute hubiera sido condicionado en ningún momento.

#### 4. EL RECURSO DE APELACION DEL DEMANDANTE

En la audiencia pública oportunamente se solicitó la revocatoria de la sentencia, razonando de este modo: El apoderado señala que el actor cumplió con los requisitos que exige la ley 100 del 93 e insiste en que “paró las cotizaciones cuando cumplió los dos requisitos de ley, como es la edad y las semanas cotizadas”, afirmando que “se hace retroactiva la mesada, el derecho, desde que genera el derecho, desde que cumple con requisitos como en el RPMPD”. Luego efectúa consideraciones generales sobre que por eso es muy debatido el RAIS, que son muy pocas las personas que se pensionan con ese régimen, por lo que tendrá que desaparecer y por ello, las inquietudes del presidente para volverlo al Sistema Público. Finalmente, reitera que ***“el estatus no debió ser desde junio de 2019, sino desde el día que cumplió el último requisito que fue la edad, porque tenía más de 1.300 semanas y posteriormente cesó cotizaciones en aras de que empezara a disfrutar de la pensión”***.

#### 5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido en esta instancia para alegar<sup>6</sup>, las partes se abstuvieron de intervenir.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud de las materias del recurso de apelación, por lo el análisis en esta instancia se contrae a determinar si de acuerdo con las normas y jurisprudencia que regulan el derecho al reconocimiento de la pensión mínima en el RAIS, se acredita el derecho a un retroactivo pensional desde la fecha en que el señor OMAR DE JESUS ZAPATA ZAPATA cumplió los 62 años de edad, por el hecho de haber cesado cotizaciones.

#### 6. EL DEMANDANTE NO ACREDITA EL DERECHO AL RETROACTIVO DE LA GARANTÍA PENSIÓN MÍNIMA QUE LE FUE OTORGADO

<sup>6</sup> SEGUNDA INSTANCIA – archivo 05

Para efectuar el análisis debe señalarse en primer lugar, que de acuerdo con lo previsto en el **artículo 64** de la Ley 100 para acceder a una **pensión de vejez** en el régimen de ahorro individual es necesario que el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual permita *financiar* una pensión mensual del 110% del salario mínimo legal mensual vigente, y para ello deberá tenerse en cuenta **el valor del bono pensional si a él hay lugar**.

El **artículo 65 de la Ley 100 de 1993** consagra el derecho a la **pensión de vejez** con garantía de pensión mínima con dos requisitos, **57 años de edad en el caso de la mujer** y **1.150** semanas, debiéndose cumplir ambos para acceder a la prestación. Y en el **artículo 67** de la Ley 100 se establece que los afiliados que tengan derecho a recibir bonos pensionales solo podrán hacerlos efectivos *“a partir de la fecha en la cual cumplan las edades para acceso a la pensión, previstas en el artículo 65 de la presente Ley”*, esto es, **57 años si es mujer, y 62 si es hombre**<sup>7</sup>.

Pues bien, para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es imperioso que la **AFP**, en nombre del **afiliado**, adelante varias actuaciones frente a las diversas entidades del Sistema de Seguridad Social, pues como se verá, el reconocimiento oportuno y debido de la prestación depende de la gestión adelantada por todas ellas.

En efecto, respecto a las obligaciones y deberes de las AFP en el trámite de esta GARANTIA DE PENSION MINIMA y las CONSECUENCIAS JURIDICAL DEL INCUMPLIMIENTO, se ha pronunciado la **Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia** en diversas providencias, entre ellas las identificadas con **Radicado 41.993 del 20 de febrero de 2013, SL2490-2018, SL1168-2019, SL1534-2019, SL3608-2019 y SL3591-2019, precedente en el que se han consolidado los siguientes criterios: i)** Las AFP son las encargadas de los trámites de la GPM, manifestación del principio de solidaridad en el RAIS y forma de mitigar la volatilidad del mercado financiero para conformar el capital necesario para una pensión, así como paliar la inestabilidad en el empleo. ii) La actuación de las AFP debe estar revestida de la ética propia de la prestación de un servicio público como lo es la seguridad social, máxime cuando se trata de personas que llegan a su vejez en una situación económica precaria. Por ello, debe presentarse el **concurso de las entidades especializadas para lograr la atención de esta población**. iii) Aunque no se

<sup>7</sup> **ARTÍCULO 65. GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ.** Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

**PARÁGRAFO.** Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.

tenga aprobación de la OPB, la AFP puede comenzar a pagar una **pensión temporal** mientras se aprueba por esa oficina; y si actúa de manera **negligente** en dicho trámite, es la responsable de reconocer la pensión **con sus propios recursos**.

La normatividad que regula la materia y la jurisprudencia de la Alta Corporación nos muestra en relación con este tema, en síntesis:

- Las AFP tienen el deber de ser diligentes cuando reciben la solicitud de pensión de vejez de un afiliado y en el marco de la prestación del servicio público de seguridad social, en el evento en que advierta que este afiliado **no cuenta con el capital suficiente** para financiarla, tiene la obligación de acudir a la OPB para solicitar la **GPM**, debiendo **verificar** si en efecto cumple con los requisitos fijados por la Ley para ello.
- La **AFP** comienza a pagar la pensión de vejez con GPM **una vez** la OPB autoriza la GPM, y atendiendo a que se trata de un trámite interno entre entidades especializadas del SGP frente a un afiliado que está en una situación económica difícil en su vejez, debe concurrir la colaboración de estas entidades, pues justamente **la fecha a partir de la cual se reconoce la prestación depende de la gestión por ellas adelantada, en virtud de ese trámite de responsabilidad compartida**.
- Debe entonces analizarse cada caso concreto para hallar las reglas que determinan el reconocimiento del **retroactivo pensional**, porque como bien lo ha señalado la Sala Laboral de la Corte, en el caso de la GPM el reconocimiento pensional **no depende del capital, ni de la conformación del grupo familiar, ni mucho menos de la intención del afiliado**, sino justamente de la diligencia de las AFP en su actuar.
- Considerar que el retroactivo solo nace desde la fecha de la respuesta de la OPB o de aquella en que la AFP decida hacerlo, implica que estas entidades pudieran burlar los plazos descritos en la Ley y que, por su desidia, se vea menoscabado el derecho de los afiliados a pensionarse oportunamente.
- Las reglas aplicables en cuanto al retroactivo pensional en el RAIS **no son** las consagradas en el **Decreto 758 de 1990**, por tratarse de regímenes excluyentes y con particularidades
- Finalmente, debe señalarse que el deber diligencia de la AFP se extiende al **trámite de la construcción de historia laboral para el bono pensional**, que tiene efecto directo en relación con la densidad de semanas para poder acceder a la garantía de pensión mínima. Y dadas las particularidades del caso que ocupa la atención de la Sala, éste debe ser analizado de manera concreta y así se aborda a continuación, antes de descender al caso concreto.



## EL TRÁMITE DE BONO PENSIONAL Y EL REQUISITO DE SEMANAS PARA LA GARANTÍA DE PENSION MÍNIMA EN EL RAIS – LA RESPONSABILIDAD DE LAS AFP EN EVENTOS DE NEGLIGENCIA –

En relación con el requisito de **semanas** para acceder a la **pensión de vejez** con **GPM**, el párrafo del **artículo 65** de la Ley 100 dispone que para efectos de su cómputo se tendrá en cuenta lo previsto en los párrafos del **artículo 33**, que fue modificado por el **artículo 9° de la Ley 797 de 2003**, en el que se consagra que se tienen en cuenta las semanas cotizadas **“en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones”**.

En efecto, de conformidad con los **artículos 115 de la Ley 100 de 1993 y 17 del Decreto 3798 de 2003**, cuando un afiliado al Régimen de Prima Media se traslada al RAIS, y cotiza durante **150 semanas o más**, tiene derecho a un **Bono Pensional Tipo A (Modalidad 2)**, mecanismo de **financiación** de las prestaciones y que tiene como elemento determinante la **historia laboral** para efectos de determinar la cantidad de semanas.

Tal como se encuentra reglado de la normativa sobre la materia y lo ha expresado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la CSJ<sup>8</sup> y de la Corte Constitucional<sup>9</sup>, el procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de un **Bono pensional tipo A** es el siguiente: **i)** Conformación de la historia laboral del afiliado; **ii)** Solicitud y realización de la liquidación provisional; **iii)** Aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; **iv)** Emisión del bono; **v)** Expedición del bono; **vi)** Redención; **vii)** Pago. Y según los **artículos 20 del Decreto 656 de 1994 y 48 del Decreto 1748 de 1995**, las AFP tienen el deber de actuar en nombre del afiliado, como una suerte de representantes, en las acciones y procesos de solicitud y pago de bonos pensionales cuando se cumplan los requisitos; actuación que debe estar revestida de la ética propia de la prestación de un servicio público como lo es la seguridad social, máxime cuando se trata de personas que llegan a su vejez en una situación económica precaria.

La normativa vigente ha dotado de contenido el **deber de diligencia** de las distintas entidades que intervienen en el trámite, incluyéndose claro está a las **AFP**, quienes, se reitera, actúan **en nombre del afiliado**. Este deber de diligencia se concreta en el trámite de **conformación de historia laboral, liquidación provisional y emisión del BONO PENSIONAL** de la siguiente manera:

<sup>8</sup> SL196-2019 del 23 de enero – Rad. 67677 MP CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO - SL2756-2019 del 3 de julio – Rad. 65358 MP SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO (DESCONGESTIÓN)

<sup>9</sup> T-455A de 2015 y T-056 de 2017

- El **inciso segundo del art. 20 del Decreto 656 de 1994** consagra que las solicitudes de emisión de bono pensional deben ser presentadas por las **AFP dentro de los seis (6) meses siguientes** a la **vinculación** del afiliado, y las AFP deberán efectuar un **seguimiento trimestral** al trámite hasta tanto sea **emitido**. Esta norma consagra también que los **afiliados deberán** suministrar a las AFP la información necesaria y que esté a su alcance para tramitar las solicitudes. Pero *“En todo caso, las administradoras estarán facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales serán de obligatoria expedición por parte de los destinatarios”*. Lo anterior quiere decir que los trámites relacionados con el **bono pensional** no se realizan *ad- portas* de consolidarse el derecho pensional del afiliado, sino que comienzan desde la **vinculación misma a la AFP**.
- Y en consonancia con esta facultad de la AFP, el **art. 48 del Decreto 1748 de 1995** modificado por el **art. 22 del Decreto 1513 de 1998** consagra que, para la **conformación de la historia laboral**, la AFP además de tener en cuenta el **historial laboral masivo del ISS** y la **información suministrada por el afiliado**, debe solicitar a los **empleadores, cajas o fondos** en los que cotizó el afiliado, para que estos **confirмен, modifiquen o nieguen la historia laboral**. Este trámite debe adelantarse dentro de los **30 días hábiles siguientes a la solicitud** elevada por el afiliado y las **cajas o empleadores** cuentan con un plazo igual, prorrogable, para **confirmarla, modificarla o negarla**
- En relación con la **historia laboral** para el bono pensional, de conformidad con los **arts. 1 y 47 del Decreto 1748 de 1995**, el entonces ISS remitió un **archivo laboral masivo** a la **OBP del MINHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, que es equivalente a una certificación expedida por el ISS. Así, el **art. 5 del Decreto 3798 de 2003** reitera que ese es el único archivo laboral masivo válido del ISS, pero también precisa que en caso de que la **información del archivo laboral masivo NO coincida** con una **certificación individual**, entonces *“prima la certificación individual y el ISS deberá proceder a realizar los ajustes en su archivo laboral masivo”*, corrección que como se vio, debe ser solicitada por la **AFP en nombre del afiliado**.
- Y respecto al intercambio de información entre las distintas entidades, **art. 49 del Decreto 1748 de 1995** determina que *“Todo intercambio de información entre emisores y entidades administradoras, podrá realizarse a través de archivos informáticos cuyas características y diseños serán fijados por la OBP”*.
- Así es que según el **art. 48 del Decreto 1748 de 1995** modificado por el **22 del Decreto 1513 de 1998**, solo una vez se concluya el procedimiento para el establecimiento de la **historia laboral** es que la **AFP, en nombre del afiliado**, debe



solicitar al **emisor** -en este caso la **OBP**- que proceda con la **liquidación provisional**, para lo que la **OBP** usará la información confirmada, modificada o negada.

Luego la **OBP** realiza la **liquidación provisional** del bono pensional, la que de conformidad con el **inciso 9 del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995**, no constituye una situación jurídica consolidada, pudiéndose presentar **varias liquidaciones provisionales**, dependiendo de la información con la que cuenta el afiliado y la AFP. Y una vez se realiza la liquidación provisional la **AFP** debe dársela a conocer al **afiliado** para que este manifieste su **aprobación** y luego se adelanta el procedimiento de **emisión, redención y pago**.

Debe anotarse que el anterior trámite cobra una relevancia fundamental para el afiliado al RAIS cuando solicita el reconocimiento de una **pensión de vejez con garantía de pensión mínima**, principalmente por dos motivos: i) Para la contabilización de las **semanas** deben tenerse en cuenta las cotizadas en ambos regímenes, pero aquellas semanas cotizadas en el entonces **ISS** hoy **Colpensiones**, o en **otra caja**, están reflejadas en la **historia laboral** del **Bono pensional**. ii) Con la historia laboral es que se **liquida el valor bono**, aspecto que resulta relevante porque la **pensión de vejez también se financia con su valor**<sup>10</sup>

En últimas, se estaría ante dilaciones injustificadas frente a los usuarios del sistema pensional, ocurridas en una fase sensible del ser humano **-su vejez-**, en la cual se espera un servicio oportuno, cumplido y eficiente, que garantice su prestación correcta en defensa de la dignidad de los afiliados y sus familias, máxime frente a esta población que es objeto de una protección especial del Estado por tener una situación económica **precaria**.

Es por lo anterior que el artículo **21 del Decreto 656 de 1994** dispone que, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, **de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales** o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, **por razones imputables a las administradoras**, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos. En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en

---

<sup>10</sup> Para el caso de la **mujer** la edad para la **garantía de pensión mínima -57 años-** no coincide con aquella en la que se **redime y paga** el bono pensional **-60 años-** y como se verá más adelante, este aspecto es determinante frente a la forma en la que la **OBP** intervendría en relación con la **aprobación** de la **GPM**, concretamente si es con una **temporal** o con una **definitiva**. Lo anterior de conformidad con el **art. 3 del Decreto 142 de 2006**.

todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.

Las anteriores consideraciones relacionadas con el deber de diligencia de las **AFP** en el trámite del **Bono pensional tipo A** y la responsabilidad de estas entidades por su actuar **negligente** han sido ampliamente analizadas en la jurisprudencia nacional, concluyendo que la AFP debía responder por sus propios recursos ante las omisiones relacionadas con la consolidación de la historia laboral del **bono pensional** para acceder a una **pensión anticipada de vejez**<sup>11</sup>.

Pues bien, de acuerdo con el análisis previamente definido, la Sala comparte la decisión absolutoria por las siguientes razones:

El señor OMAR DE JESUS ZAPATA ZAPATA nació el **15 de septiembre de 1955**<sup>12</sup>, estuvo afiliado inicialmente al I.S.S. efectuando cotizaciones con diversos empleadores a partir del **19 de julio de 1982**<sup>13</sup>

Se afilió al Régimen de Ahorro Individual (RAIS), administrado por la AFP PROTECCION desde el **17 de abril de 1995**<sup>14</sup>, con derecho a que se emitiera en nombre suyo un Bono pensional tipo A modalidad 2 por haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y tener una historia laboral de cotización al ISS o a cajas públicas superior a 150 semanas.

Habiéndose efectuado el traslado de régimen desde abril de 1995, la Oficina de Bonos Pensionales efectuó una **liquidación provisional** en respuesta a la petición ingresada por la AFP el día **29 de octubre de 1998**<sup>15</sup>, siendo claro que la fecha de redención normal del Bono Pensional tuvo lugar el día **15 de septiembre de 2017**, fecha en la cual el señor ZAPATA ZAPATA alcanzó los 62 años de edad de que trata el literal a) del artículo 20 del Decreto 1748 de 1995 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

La AFP PROTECCION solicitó la emisión del bono pensional, a lo que se accedió por la Oficina de Bonos Pensionales a través de la **Resolución No. 1902 del 20 de febrero de 2004**. Y se acredita que el bono fue reliquidado en su valor por la OBP del Ministerio

<sup>11</sup> **SL196-2019, SL 4207 -2019** y la de instancia **SL 3394-022; SL1142-2021**,

<sup>12</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 – página 27

<sup>13</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 37 a 44

<sup>14</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 45

<sup>15</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 65

de Hacienda y Crédito Público previa anulación del acto administrativo anterior con la **Resolución No. 17058 del 19 de septiembre de 2017**<sup>16</sup> de conformidad con lo establecido en el Artículo 56 del Decreto 1748 de 1995 modificado por el Artículo 24 del Decreto 1513 de 1998, hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016.

Fue así como, mediante la **Resolución No. 17124 del 27 de septiembre de 2017** la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procedió a EMITIR y REDIMIR (PAGAR) el bono pensional (Cupón principal a cargo de la Nación y cuota parte ISS – Hoy COLPENSIONES) del señor OMAR DE JESUS ZAPATA ZAPATA<sup>17</sup> teniendo en cuenta un total de 5.541 días (792 semanas) reportadas para ese momento en el archivo laboral masivo de COLPENSIONES.

Y con posterioridad, al evidenciar un aumento en el número de días válidos para la liquidación de bono pensional, pasando de 5.541 a **5.570** días válidos para bono según la liquidación provisional del **06 de febrero de 2019**, se generó el derecho en favor del demandante, a la emisión y redención de un bono pensional “COMPLEMENTARIO”<sup>18</sup>:

LIQUIDACION BONO - VERSION COMPLEMENTARIA			
Modalidad	2	Versión	4
Tiempo Válido Para Bono (sin traslapes)	5,570(días) , 796(semanas)	Tiempo Total Trabajado	5,570
Empleadores Salario Base	GASES DE ANT LTDA		
Fecha Redención Normal (DD/MM/AAAA)	15/09/2017	Tasa Interes (%)	4.0
Causal Redención			
Valor Emi, Reco o Red en Versión Ant. a F.C.	\$11,039,184	Valor Neto Versión A F.C.	\$32,972

Este bono fue EMITIDO y REDIMIDO mediante la **Resolución No. 19180 del 20 de febrero de 2019**<sup>19</sup>, con ocasión de la solicitud que al respecto ingresó la AFP PROTECCION el día **14 de febrero de 2019**<sup>20</sup> efectuada con ocasión de la solicitud del reconocimiento pensional radicado por OMAR DE JESUS ZAPATA ZAPATA el día **6 de febrero de 2019**<sup>21</sup>

Se evidencia así, que la AFP PROTECCION el **14 de mayo de 2019** ingresó al sistema interactivo de la OBP la solicitud de reconocimiento en favor de su afiliado de la Garantía de Pensión Mínima de Vejez de que trata el Artículo 65 de la Ley 100/934<sup>22</sup>, petición que fue atendida favorablemente con la **Resolución No. 19898 del 31 de mayo de 2019**<sup>23</sup>.

<sup>16</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 05 – página 19 a 24

<sup>17</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 28 a 33

<sup>18</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 44

<sup>19</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 33 a 36

<sup>20</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 64

<sup>21</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 05- página 29

<sup>22</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 – página 49 a 63

<sup>23</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 05- página 46 – 53 y archivo 16 – página 13 a 19

Y se verifica, que la AFP PROTECCION otorgó el derecho pensional **a partir del 1 de junio de 2019<sup>24</sup>**, al día siguiente del reconocimiento efectuado por la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en todo caso, dentro del plazo de los 4 meses siguientes a la solicitud del derecho por el demandante, que fue radicado en **febrero de 2019**.

Siendo, así las cosas, no se advierte por esta corporación que la tardanza en el reconocimiento de la prestación se deba a incumplimiento de las entidades en el trámite de responsabilidad compartida a su cargo; verificándose por el contrario, que si bien el señor OMAR DE JESÚS ZAPATA ZAPATA había cesado cotizaciones desde el mes **febrero de 2008<sup>25</sup>** y habiendo cumplido los **62 años** de edad el día **15 de septiembre de 2017**, sin embargo solo solicitó el derecho pensional en el mes de **febrero de 2019** y a partir de ese momento PROTECCIÓN adelantó las gestiones a su cargo para efectuar el reconocimiento oportuno **antes del vencimiento de los 4 meses** establecido en el artículo 33 de la Ley 100.

Así, si bien conforme la jurisprudencia nacional en el caso de la GPM el reconocimiento pensional no depende del capital ni de la conformación del grupo familiar y mucho menos de la intención del afiliado, sino justamente de la diligencia de las AFP en su actuar; en este caso particular no se advierte en los trámites adelantados por PROTECCIÓN para la construcción de historia laboral para el bono pensional y de Garantía de Pensional un actuar negligente con el que se hubiese visto menoscabado el derecho pensional del señor ZAPATA ZAPATA.

Finalmente, baste reiterar al apoderado recurrente que, de acuerdo con las normas propias del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, para el caso del actor no resulta procedente la aplicación de los criterios que en materia de retroactivo pensional se definen en el Régimen de Prima Media a partir de lo previsto en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 en concordancia con el artículo 31 de la Ley 100.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a esta corporación a CONFIRMAR la decisión absolutoria. Por no haber salido avante el recurso del demandante se le condenará en costas en esta instancia. Se fijan como agencias en derecho la suma de **\$300.000** de conformidad con el **art. 365 del CGP**.

<sup>24</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 01- página 16 – 25 y 26. archivo 05- página 39 a 41

<sup>25</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 05- página 38

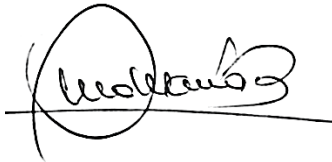
## 7. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, decide:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por la **JUEZ QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo del DEMANDANTE. Se fijan como agencias en derecho la suma de **\$300.000**.

**Las Magistradas,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**